

PROYECTO DE LEY

**APROBACIÓN DE LA CONVENCION INTERAMERICANA SOBRE
LA PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS DE
LAS PERSONAS MAYORES**

Expediente N.º 19.760

ASAMBLEA LEGISLATIVA:

Se afirma que el principio de universalidad de los derechos humanos es la piedra angular del derecho internacional de los derechos humanos. Universalidad que sugiere que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y que establece que los derechos humanos se dirigen a todos los seres humanos y deben ser reconocidos a todos por igual, en todas las situaciones.

Precisamente recurriendo al argumento de la universalidad de los derechos humanos y al reconocimiento formal de la igualdad, es que se ha señalado que los instrumentos internacionales existentes sobre la materia reconocen y protegen suficientemente los derechos humanos de las personas adultas mayores (o “personas mayores” en el lenguaje internacional), apuntando simplemente una dispersión normativa. Incluso, abogando por la implementación de resoluciones y declaraciones que forman parte del soft law¹ y que por ende, no revisten carácter vinculante para los Estados.

No obstante, esta visión amplia en la práctica se ha detectado que la universalidad, tal como se consagra en los actuales instrumentos internacionales de derechos humanos vigentes, no garantiza el ejercicio pleno de los derechos humanos por las personas adultas mayores. Situación que se agrava con fenómeno de dispersión normativa, vacíos en la regulación de derechos humanos específicos para este grupo etario y por supuesto, el carácter no vinculante de las declaraciones de principios y resoluciones existentes sobre la materia.

Esto provoca una serie de lagunas relacionadas con el disfrute pleno de los derechos humanos de las personas mayores, realidad de la que no escapa el país y que afecta ámbitos como la prevención y protección contra la violencia y los malos tratos, la protección social, la alimentación, la vivienda adecuada, el

¹ Normas ligeras, dúctiles o blandas, en el sentido de falta de eficacia obligatoria *per se*.

empleo, la capacidad jurídica y de actuar, el acceso a la justicia, la asistencia sanitaria y los cuidados asistenciales a largo plazo y cuidados paliativos. Incluso, el no reconocimiento de derechos básicos como la no discriminación por edad en la vejez, la capacidad de actuar y el derecho a la salud sexual y reproductiva de las personas adultas mayores, además de un sinnúmero de vulneraciones que afectan el pleno goce y ejercicio de sus derechos humanos.

Las personas mayores tienen una especificidad y características propias que deben ser tomadas en cuenta para que ostenten una igualdad real y no meramente formal, en el disfrute y ejercicio de los derechos humanos frente al colectivo social. En tal sentido, debe necesariamente eliminarse toda discriminación por razones de edad y a la vez afirmarse múltiples derechos, que el marco jurídico internacional existente no garantiza.

A nivel regional, debe recordarse que Costa Rica dio los primeros pasos para lograr el efectivo reconocimiento de los derechos humanos de las personas adultas mayores, mediante el auspicio de la celebración de la tercera Conferencia regional intergubernamental sobre envejecimiento en América Latina y el Caribe, la cual se celebró en San José, del 8 al 11 de mayo de 2012.

Con esta Conferencia se realizó una contribución invaluable en el ámbito internacional, con la adopción de la Carta de San José sobre los derechos de las personas mayores de América Latina y el Caribe, primer instrumento en la historia de la región, que aunque de carácter no vinculante, sistematizó de manera clara y precisa, la temática de la persona adulta mayor desde la perspectiva de los derechos humanos.

Aunado a esto es necesario apuntar que en materia de reconocimiento de derechos humanos para este sector poblacional, el continente americano ha avanzado y hoy lo celebramos.

El pasado 15 de junio de 2015, en el cuadragésimo quinto periodo ordinario de sesiones, los Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA) aprobaron, la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores en la Asamblea General de la institución. Documento que de inmediato fue firmado por los gobiernos de Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Costa Rica, en la sede principal del organismo hemisférico, en Washington D.C.

Con la aprobación de esta Convención, el continente americano se convierte en la primera región a nivel mundial, en contar con un instrumento jurídicamente vinculante que protege los derechos humanos de las personas adultas mayores y que fomenta un envejecimiento activo en todos los ámbitos.

El objeto de la Convención es promover, proteger y asegurar el reconocimiento y el pleno goce del ejercicio, en condiciones de igualdad, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de la persona adulta mayor, y

resalta esos derechos específicos que deben reconocerse a toda persona durante su vejez, para contribuir a su plena inclusión, integración y participación en la sociedad.

Durante la firma del documento, el Secretario General de la OEA, Luis Almagro, señaló:

“Este es un paso muy importante para todos. Nuestro lema de ‘Más derechos para más personas’ está totalmente en la lógica de la Convención, que reafirma la dimensión hemisférica de nuestro trabajo, en este caso el compromiso de asegurar la más plena vigencia de los derechos de las personas mayores, teniendo en cuenta sus necesidades y especificidades”².

Además, instó a los Estados a adoptar las “medidas legislativas o de otro carácter” que fueren necesarias para hacer efectivos los derechos y libertades de los adultos mayores, incluyendo campañas de concientización.

Según cifras de la OEA, en la actualidad, las personas con 60 o más años de las Américas representan el 14 por ciento del total de la población del hemisferio (más de 135 millones de personas). En 2030, cerca de dos de cada cinco personas tendrán 60 o más años, y en total habrá más de 215 millones de personas mayores en las Américas.

Según la Encuesta Nacional de Hogares (ENAO) 2014, realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), en Costa Rica existen actualmente 440.799 personas adultas mayores y se proyecta que tengamos 723.971 personas de 65 años o más para el año 2030. Cifra que resulta mayor para el año 2050, donde se prevé que 1.262.311 personas adultas mayores habiten en el país.

Con estas cifras y el panorama que el país enfrenta en materia de envejecimiento poblacional, la Convención permitirá reforzar las obligaciones jurídicas en el respeto, promoción y disfrute efectivo de los derechos humanos de las personas adultas mayores.

Dicho instrumento regula de manera efectiva los principios humanitarios generales aplicables a la convención (art. 3), los deberes generales de los Estados parte (art. 4), el derecho a la igualdad y no discriminación por razones de edad (art. 5), el derecho a la vida y a la dignidad en la vejez (art. 6), el derecho a la independencia y a la autonomía (art. 7), el derecho a la participación e integración comunitaria (art. 8), el derecho a la seguridad y a una vida sin ningún tipo de violencia (art. 9), el derecho a no ser sometido a tortura ni a penas o tratos crueles, inhumanos y degradantes (art. 10), el derecho a brindar consentimiento

² http://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=C-198/15

libre e informado en el ámbito de la salud (art. 119) y los derechos de la persona mayor que recibe servicios de cuidado a largo plazo (art. 12).

Además, se regulan los derechos a la libertad personal (art. 13), a la libertad de expresión y de opinión y al acceso a la información (art. 14), a la nacionalidad y a la libertad de circulación (art. 15), a la privacidad y a la intimidad (art. 16), a la seguridad social (art. 17), al trabajo (art. 18), a la salud (art. 19), a la educación (art. 20), a la cultura (art. 21), a la recreación, al esparcimiento y al deporte (art. 22), a la propiedad (art. 23), a la vivienda (art. 24), a un medio ambiente sano (art. 25) y los derechos políticos, de reunión y asociación (arts. 27 y 28).

También se destaca la protección efectiva al derecho a la accesibilidad y a la movilidad personal (art. 26), los derechos derivados de situaciones de riesgo y emergencia (art. 29), el reconocimiento como persona ante la ley (art. 30) y el derecho de acceso a la justicia (art. 31) y toma de conciencia (art. 32). Culmina el articulado con el mecanismo de seguimiento de la convención y los medios de protección (arts. 33 a 36) y las disposiciones generales (arts. 37 a 41).

De esta manera, se tiene el primer instrumento internacional sobre los derechos humanos de las personas adultas mayores. Una convención completa, específica y de avanzada en la materia, necesaria ante el panorama de una sociedad con una mayor expectativa de vida.

Las personas adultas mayores no pueden esperar. Costa Rica debe ratificar este instrumento, en aras de garantizar la protección efectiva de los derechos humanos de la población adulta mayor.

Para que la Convención entre en vigor es necesario que un mínimo de dos países firmantes la hayan ratificado, de manera que se solicita a los señores y señoras diputados y diputadas, dar el ejemplo en el mundo y siguiendo la tradición de respeto a los derechos humanos, que siempre ha caracterizado al país, ratificar la presente Convención.

En virtud de lo anterior, sometemos a conocimiento de la Asamblea Legislativa el proyecto de ley adjunto, referido a la "Aprobación de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores", para su respectiva aprobación legislativa.

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
DECRETA:

**APROBACIÓN DE LA CONVENCIÓN INTERAMERICANA SOBRE LA
PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS
DE LAS PERSONAS MAYORES**

ARTÍCULO ÚNICO.- Apruébese en cada una de sus partes la **Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores**, adoptada el 15 de junio de 2015 en Washington, D.C., Estados Unidos de América, cuyo texto es el siguiente:

**CONVENCIÓN INTERAMERICANA SOBRE LA PROTECCIÓN DE
LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS MAYORES**

CONVENCIÓN INTERAMERICANA SOBRE LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS MAYORES

PREÁMBULO

Los Estados Parte en la presente Convención,

Reconociendo que el respeto irrestricto a los derechos humanos ha sido consagrado en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y reafirmado en otros instrumentos internacionales y regionales;

Reiterando el propósito de consolidar, dentro del marco de las instituciones democráticas, un régimen de libertad individual y de justicia social, fundado en el respeto de los derechos fundamentales de la persona;

Teniendo en cuenta que, con arreglo a la Declaración Universal de los Derechos Humanos y a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, solo puede realizarse el ideal del ser humano libre, exento del temor y de la miseria, si se crean condiciones que permitan a cada persona gozar de sus derechos económicos, sociales y culturales, tanto como de sus derechos civiles y políticos;

Reafirmando la universalidad, indivisibilidad, interdependencia e interrelación de todos los derechos humanos y libertades fundamentales, así como la obligación de eliminar todas las formas de discriminación, en particular, la discriminación por motivos de edad;

Resaltando que la persona mayor tiene los mismos derechos humanos y libertades fundamentales que otras personas, y que estos derechos, incluido el de no verse sometida a discriminación fundada en la edad ni a ningún tipo de violencia, dimanar de la dignidad y la igualdad que son inherentes a todo ser humano;

Reconociendo que la persona, a medida que envejece, debe seguir disfrutando de una vida plena, independiente y autónoma, con salud, seguridad, integración y participación activa en las esferas económica, social, cultural y política de sus sociedades;

Reconociendo también la necesidad de abordar los asuntos de la vejez y el envejecimiento desde una perspectiva de derechos humanos que reconoce las valiosas contribuciones actuales y potenciales de la persona mayor al bienestar común, a la identidad cultural, a la diversidad de sus comunidades, al desarrollo humano, social y económico y a la erradicación de la pobreza;

Recordando lo establecido en los Principios de las Naciones Unidas en favor de las Personas de Edad (1991); la Proclamación sobre el Envejecimiento (1992); la

Declaración Política y el Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento (2002), así como los instrumentos regionales tales como la Estrategia Regional de implementación para América Latina y el Caribe del Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento (2003); la Declaración de Brasilia (2007), el Plan de Acción de la Organización Panamericana de la Salud sobre la salud de las personas mayores, incluido el envejecimiento activo y saludable (2009), la Declaración de Compromiso de Puerto España (2009) y la Carta de San José sobre los derechos de las personas mayores de América Latina y el Caribe (2012);

Decididos a incorporar y dar prioridad al tema del envejecimiento en las políticas públicas, así como a destinar y gestionar los recursos humanos, materiales y financieros para lograr una adecuada implementación y evaluación de las medidas especiales puestas en práctica;

Reafirmando el valor de la solidaridad y complementariedad de la cooperación internacional y regional para promover los derechos humanos y las libertades fundamentales de la persona mayor;

Respaldando activamente la incorporación de la perspectiva de género en todas las políticas y programas dirigidos a hacer efectivos los derechos de la persona mayor y destacando la necesidad de eliminar toda forma de discriminación;

Convencidos de la importancia de facilitar la formulación y el cumplimiento de leyes y programas de prevención de abuso, abandono, negligencia, maltrato y violencia contra la persona mayor, y la necesidad de contar con mecanismos nacionales que protejan sus derechos humanos y libertades fundamentales; y

Convencidos también de que la adopción de una convención amplia e integral contribuirá significativamente a promover, proteger y asegurar el pleno goce y ejercicio de los derechos de la persona mayor, y a fomentar un envejecimiento activo en todos los ámbitos,

Han convenido suscribir la presente Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores (en adelante, la "Convención"):

CAPÍTULO I OBJETO, ÁMBITO DE APLICACIÓN Y DEFINICIONES

Artículo 1 Ámbito de aplicación y objeto

El objeto de la Convención es promover, proteger y asegurar el reconocimiento y el pleno goce y ejercicio, en condiciones de igualdad, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de la persona mayor, a fin de contribuir a su plena inclusión, integración y participación en la sociedad. Lo dispuesto en la

presente Convención no se interpretará como una limitación a derechos o beneficios más amplios o adicionales que reconozcan el derecho internacional o las legislaciones internas de los Estados Parte, a favor de la persona mayor.

Si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en esta Convención no estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados Parte se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades.

Los Estados Parte solo podrán establecer restricciones y limitaciones al goce y ejercicio de los derechos establecidos en la presente Convención mediante leyes promulgadas con el objeto de preservar el bienestar general dentro de una sociedad democrática, en la medida en que no contradigan el propósito y razón de los mismos.

Las disposiciones de la presente Convención se aplicarán a todas las partes de los Estados federales sin limitaciones ni excepciones.

Artículo 2 **Definiciones**

A los efectos de la presente Convención se entiende por:

"Abandono": La falta de acción deliberada o no para atender de manera integral las necesidades de una persona mayor que ponga en peligro su vida o su integridad física, psíquica o moral.

"Cuidados paliativos": La atención y cuidado activo, integral e interdisciplinario de pacientes cuya enfermedad no responde a un tratamiento curativo o sufren dolores evitables, a fin de mejorar su calidad de vida hasta el fin de sus días. Implica una atención primordial al control del dolor, de otros síntomas y de los problemas sociales, psicológicos y espirituales de la persona mayor. Abarcan al paciente, su entorno y su familia. Afirman la vida y consideran la muerte como un proceso normal; no la aceleran ni retrasan.

"Discriminación": Cualquier distinción, exclusión, restricción que tenga como objetivo o efecto anular o restringir el reconocimiento, goce o ejercicio en igualdad de condiciones de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la esfera política, económica, social, cultural o en cualquier otra esfera de la vida pública y privada.

"Discriminación múltiple": Cualquier distinción, exclusión o restricción hacia la persona mayor fundada en dos o más factores de discriminación.

"Discriminación por edad en la vejez": Cualquier distinción, exclusión o restricción basada en la edad que tenga como objetivo o efecto anular o restringir el reconocimiento, goce o ejercicio en igualdad de condiciones de los derechos humanos y libertades fundamentales en la esfera política, económica, social, cultural o en cualquier otra esfera de la vida pública y privada.

"Envejecimiento": Proceso gradual que se desarrolla durante el curso de vida y que conlleva cambios biológicos, fisiológicos, psico-sociales y funcionales de variadas consecuencias, las cuales se asocian con interacciones dinámicas y permanentes entre el sujeto y su medio.

"Envejecimiento activo y saludable": Proceso por el cual se optimizan las oportunidades de bienestar físico, mental y social, de participar en actividades sociales, económicas, culturales, espirituales y cívicas, y de contar con protección, seguridad y atención, con el objetivo de ampliar la esperanza de vida saludable y la calidad de vida de todos los individuos en la vejez, y permitirles así seguir contribuyendo activamente a sus familias, amigos, comunidades y naciones. El concepto de envejecimiento activo y saludable se aplica tanto a individuos como a grupos de población.

"Maltrato": Acción u omisión, única o repetida, contra una persona mayor que produce daño a su integridad física, psíquica y moral y que vulnera el goce o ejercicio de sus derechos humanos y libertades fundamentales, independientemente de que ocurra en una relación de confianza.

"Negligencia": Error involuntario o falta no deliberada, incluido entre otros, el descuido, omisión, desamparo e indefensión que le causa un daño o sufrimiento a una persona mayor, tanto en el ámbito público como privado, cuando no se hayan tomado las precauciones normales necesarias de conformidad con las circunstancias.

"Persona mayor": Aquella de 60 años más, salvo que la ley interna determine una edad base menor o mayor, siempre que esta no sea superior a los 65 años. Este concepto incluye, entre otros, el de persona adulta mayor.

"Persona mayor que recibe servicios de cuidado a largo plazo": Aquella que reside temporal o permanentemente en un establecimiento regulado sea público, privado o mixto, en el que recibe servicios socio-sanitarios integrales de calidad, incluidas las residencias de larga estadía, que brindan estos servicios de atención por tiempo prolongado a la persona mayor, con dependencia moderada o severa que no pueda recibir cuidados en su domicilio.

"Servicios socio-sanitarios integrados": Beneficios y prestaciones institucionales para responder a las necesidades de tipo sanitario y social de la persona mayor, con el objetivo de garantizar su dignidad y bienestar y promover su independencia y autonomía.

"Unidad doméstica u hogar": El grupo de personas que viven en una misma vivienda, comparten las comidas principales y atienden en común las necesidades básicas, sin que sea necesario que existan lazos de parentesco entre ellos.

"Vejez": Construcción social de la última etapa del curso de vida.

CAPÍTULO II PRINCIPIOS GENERALES

Artículo 3

Son principios generales aplicables a la Convención:

- a) La promoción y defensa de los derechos humanos y libertades fundamentales de la persona mayor.
- b) La valorización de la persona mayor, su papel en la sociedad y contribución al desarrollo.
- c) La dignidad, independencia, protagonismo y autonomía de la persona mayor.
- d) La igualdad y no discriminación.
- e) La participación, integración e inclusión plena y efectiva en la sociedad.
- f) El bienestar y cuidado.
- g) La seguridad física, económica y social.
- h) La autorrealización.
- i) La equidad e igualdad de género y enfoque de curso de vida.
- j) La solidaridad y fortalecimiento de la protección familiar y comunitaria.
- k) El buen trato y la atención preferencial.
- l) El enfoque diferencial para el goce efectivo de los derechos de la persona mayor.
- m) El respeto y valorización de la diversidad cultural.
- n) La protección judicial efectiva.
- o) La responsabilidad del Estado y participación de la familia y de la comunidad en la integración activa, plena y productiva de la persona mayor dentro de la sociedad, así como en su cuidado y atención, de acuerdo con su legislación interna.

CAPÍTULO III DEBERES GENERALES DE LOS ESTADOS PARTE

Artículo 4

Los Estados Parte se comprometen a salvaguardar los derechos humanos y libertades fundamentales de la persona mayor enunciados en la presente Convención, sin discriminación de ningún tipo, y a tal fin:

- a) Adoptarán medidas para prevenir, sancionar y erradicar aquellas prácticas contrarias a la presente Convención, tales como aislamiento, abandono, sujeciones físicas prolongadas, hacinamiento, expulsiones de la comunidad, la negación de nutrición, infantilización, tratamientos médicos inadecuados o desproporcionados, entre otras, y todas aquellas que constituyan malos tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes que atenten contra la seguridad e integridad de la persona mayor.
- b) Adoptarán las medidas afirmativas y realizarán los ajustes razonables que sean necesarios para el ejercicio de los derechos establecidos en la presente Convención y se abstendrán de adoptar cualquier medida legislativa que sea incompatible con la misma. No se considerarán discriminatorias, en virtud de la presente Convención, las medidas afirmativas y ajustes razonables que sean necesarios para acelerar o lograr la igualdad de hecho de la persona mayor, así como para asegurar su plena integración social, económica, educacional, política y cultural. Tales medidas afirmativas no deberán conducir al mantenimiento de derechos separados para grupos distintos y no deberán perpetuarse más allá de un periodo razonable o después de alcanzado dicho objetivo.
- c) Adoptarán y fortalecerán todas las medidas legislativas, administrativas, judiciales, presupuestarias y de cualquier otra índole, incluido un adecuado acceso a la justicia a fin garantizar a la persona mayor un trato diferenciado y preferencial en todos los ámbitos.
- d) Adoptarán las medidas necesarias y cuando lo consideren en el marco de la cooperación internacional, hasta el máximo de los recursos disponibles y tomando en cuenta su grado de desarrollo, a fin de lograr progresivamente, y de conformidad con la legislación interna, la plena efectividad de los derechos económicos, sociales y culturales; sin perjuicio de las obligaciones que sean aplicables de inmediato en virtud del derecho internacional.
- e) Promoverán instituciones públicas especializadas en la protección y promoción de los derechos de la persona mayor y su desarrollo integral.
- f) Promoverán la más amplia participación de la sociedad civil y de otros actores sociales, en particular de la persona mayor, en la elaboración, aplicación y control de políticas públicas y legislación dirigida a la implementación de la presente Convención.
- g) Promoverán la recopilación de información adecuada, incluidos datos estadísticos y de investigación, que le permitan formular y aplicar políticas, a fin de dar efecto a la presente Convención.

CAPÍTULO IV DERECHOS PROTEGIDOS

Artículo 5 Igualdad y no discriminación por razones de edad

Queda prohibida por la presente Convención la discriminación por edad en la vejez.

Los Estados Parte desarrollarán enfoques específicos en sus políticas, planes y legislaciones sobre envejecimiento y vejez, en relación con la persona mayor en condición de vulnerabilidad y aquellas que son víctimas de discriminación múltiple, incluidas las mujeres, las personas con discapacidad, las personas de diversas orientaciones sexuales e identidades de género, las personas migrantes, las personas en situación de pobreza o marginación social, los afrodescendientes y las personas pertenecientes a pueblos indígenas, las personas sin hogar, las personas privadas de libertad, las personas pertenecientes a pueblos tradicionales, las personas pertenecientes a grupos étnicos, raciales, nacionales, lingüísticos, religiosos y rurales, entre otros.

Artículo 6 Derecho a la vida y a la dignidad en la vejez

Los Estados Parte adoptarán todas las medidas necesarias para garantizar a la persona mayor el goce efectivo del derecho a la vida y el derecho a vivir con dignidad en la vejez hasta el fin de sus días, en igualdad de condiciones con otros sectores de la población.

Los Estados Parte tomarán medidas para que las instituciones públicas y privadas ofrezcan a la persona mayor un acceso no discriminatorio a cuidados integrales, incluidos los cuidados paliativos, eviten el aislamiento y manejen apropiadamente los problemas relacionados con el miedo a la muerte de los enfermos terminales, el dolor, y eviten el sufrimiento innecesario y las intervenciones fútiles e inútiles, de conformidad con el derecho de la persona mayor a expresar el consentimiento informado.

Artículo 7 Derecho a la independencia y a la autonomía

Los Estados Parte en la presente Convención reconocen el derecho de la persona mayor a tomar decisiones, a la definición de su plan de vida, a desarrollar una vida autónoma e independiente, conforme a sus tradiciones y creencias, en igualdad de condiciones y a disponer de mecanismos para poder ejercer sus derechos.

Los Estados Parte adoptarán programas, políticas o acciones para facilitar y promover el pleno goce de estos derechos por la persona mayor, propiciando su

autorealización el fortalecimiento de todas las familias, de sus lazos familiares y sociales, y de sus relaciones afectivas. En especial, asegurarán:

- a) El respeto a la autonomía de la persona mayor en la toma de sus decisiones, así como a su independencia en la realización de sus actos.
- b) Que la persona mayor tenga la oportunidad de elegir su lugar de residencia y dónde y con quién vivir, en igualdad de condiciones con las demás, y no se vea obligada a vivir con arreglo a un sistema de vida específico.
- c) Que la persona mayor tenga acceso progresivamente a una variedad de servicios de asistencia domiciliaria, residencial y otros servicios de apoyo de la comunidad, incluida la asistencia personal que sea necesaria para facilitar su existencia y su inclusión en la comunidad, y para evitar su aislamiento o separación de ésta.

Artículo 8

Derecho a la participación e integración comunitaria

La persona mayor tiene derecho a la participación activa, productiva, plena y efectiva dentro de la familia, la comunidad y la sociedad para su integración en todas ellas.

Los Estados Parte adoptarán medidas para que la persona mayor tenga la oportunidad de participar activa y productivamente en la comunidad, y pueda desarrollar sus capacidades y potencialidades. A tal fin:

- a) Crearán y fortalecerán mecanismos de participación e inclusión social de la persona mayor en un ambiente de igualdad que permita erradicar los prejuicios y estereotipos que obstaculicen el pleno disfrute de estos derechos.
- b) Promoverán la participación de la persona mayor en actividades intergeneracionales para fortalecer la solidaridad y el apoyo mutuo como elementos claves del desarrollo social.
- c) Asegurarán que las instalaciones y los servicios comunitarios para la población en general estén a disposición, en igualdad de condiciones, de la persona mayor y tengan en cuenta sus necesidades.

Artículo 9

Derecho a la seguridad y a una vida sin ningún tipo de violencia

La persona mayor tiene derecho a la seguridad y a una vida sin ningún tipo de violencia, a recibir un trato digno y a ser respetada y valorada, independientemente de la raza, el color, el sexo, el idioma, la cultura, la religión, la

opinión política o de otra índole, el origen social, nacional, étnico, indígena e identidad cultural, la posición socio-económica, discapacidad, la orientación sexual, el género, la identidad de género, su contribución económica o cualquier otra condición.

La persona mayor tiene derecho a vivir una vida sin ningún tipo de violencia y maltrato. Para los efectos de esta Convención, se entenderá por violencia contra la persona mayor cualquier acción o conducta que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la persona mayor, tanto en el ámbito público como en el privado.

Se entenderá que la definición de violencia contra la persona mayor comprende, entre otros, distintos tipos de abuso, incluso el financiero y patrimonial, y maltrato físico, sexual, psicológico, explotación laboral, la expulsión de su comunidad y toda forma de abandono o negligencia que tenga lugar dentro o fuera del ámbito familiar o unidad doméstica o que sea perpetrado o tolerado por el Estado o sus agentes dondequiera que ocurra.

Los Estados Parte se comprometen a:

- a) Adoptar medidas legislativas, administrativas y de otra índole para prevenir, investigar, sancionar y erradicar los actos de violencia contra la persona mayor, así como aquellas que propicien la reparación de los daños ocasionados por estos actos.
- b) Producir y divulgar información con el objetivo de generar diagnósticos de riesgo de posibles situaciones de violencia a fin de desarrollar políticas de prevención.
- c) Promover la creación y el fortalecimiento de servicios de apoyo para atender los casos de violencia, maltrato, abusos, explotación y abandono de la persona mayor. Fomentar el acceso de la persona mayor a dichos servicios y a la información sobre los mismos.
- d) Establecer o fortalecer mecanismos de prevención de la violencia, en cualquiera de sus manifestaciones, dentro de la familia, unidad doméstica, lugares donde recibe servicios de cuidado a largo plazo y en la sociedad para la efectiva protección de los derechos de la persona mayor.
- e) Informar y sensibilizar a la sociedad en su conjunto sobre las diversas formas de violencia contra la persona mayor y la manera de identificarlas y prevenirlas.
- f) Capacitar y sensibilizar a funcionarios públicos, a los encargados de los servicios sociales y de salud, al personal encargado de la atención y el cuidado de la persona mayor en los servicios de cuidado a largo plazo o servicios domiciliarios sobre las diversas formas de violencia, a fin de

brindarles un trato digno y prevenir negligencia y acciones o prácticas de violencia y maltrato.

- g) Desarrollar programas de capacitación dirigidos a los familiares y personas que ejerzan tareas de cuidado domiciliario a fin de prevenir escenarios de violencia en el hogar o unidad doméstica.
- h) Promover mecanismos adecuados y eficaces de denuncia en casos de violencia contra la persona mayor, así como reforzar los mecanismos judiciales y administrativos para la atención de esos casos.
- i) Promover activamente la eliminación de todas las prácticas que generan violencia y que afectan la dignidad e integridad de la mujer mayor.

Artículo 10

Derecho a no ser sometido a tortura ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes

La persona mayor tiene derecho a no ser sometida a tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

Los Estados Parte tomarán todas las medidas de carácter legislativo, administrativo o de otra índole para prevenir, investigar, sancionar y erradicar todo tipo de tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes hacia la persona mayor.

Artículo 11

Derecho a brindar consentimiento libre e informado en el ámbito de la salud

La persona mayor tiene el derecho irrenunciable a manifestar su consentimiento libre e informado en el ámbito de la salud. La negación de este derecho constituye una forma de vulneración de los derechos humanos de la persona mayor.

Con la finalidad de garantizar el derecho de la persona mayor a manifestar su consentimiento informado de manera previa, voluntaria, libre y expresa, así como a ejercer su derecho de modificarlo o revocarlo, en relación con cualquier decisión, tratamiento, intervención o investigación, en el ámbito de la salud, los Estados Parte se comprometen a elaborar y aplicar mecanismos adecuados y eficaces para impedir abusos y fortalecer la capacidad de la persona mayor de comprender plenamente las opciones de tratamiento existentes, sus riesgos y beneficios.

Dichos mecanismos deberán asegurar que la información que se brinde sea adecuada, clara y oportuna, disponible sobre bases no discriminatorias, de forma accesible y presentada de manera comprensible de acuerdo con la identidad cultural, nivel educativo y necesidades de comunicación de la persona mayor.

Las instituciones públicas o privadas y los profesionales de la salud no podrán administrar ningún tratamiento, intervención o investigación de carácter médico o quirúrgico sin el consentimiento informado de la persona mayor.

En los casos de emergencia médica que pongan en riesgo la vida y cuando no resulte posible obtener el consentimiento informado, se podrán aplicar las excepciones establecidas de conformidad con la legislación nacional.

La persona mayor tiene derecho a aceptar, negarse a recibir o interrumpir voluntariamente tratamientos médicos o quirúrgicos, incluidos los de la medicina tradicional, alternativa y complementaria, investigación, experimentos médicos o científicos, ya sean de carácter físico o psíquico, y a recibir información clara y oportuna sobre las posibles consecuencias y los riesgos de dicha decisión.

Los Estados Parte establecerán también un proceso a través del cual la persona mayor pueda manifestar de manera expresa su voluntad anticipada e instrucciones respecto de las intervenciones en materia de atención de la salud, incluidos los cuidados paliativos. En estos casos, esta voluntad anticipada podrá ser expresada, modificada o ampliada en cualquier momento solo por la persona mayor, a través de instrumentos jurídicamente vinculantes, de conformidad con la legislación nacional.

Artículo 12

Derechos de la persona mayor que recibe servicios de cuidado a largo plazo

La persona mayor tiene derecho a un sistema integral de cuidados que provea la protección y promoción de la salud, cobertura de servicios sociales, seguridad alimentaria y nutricional, agua, vestuario y vivienda; promoviendo que la persona mayor pueda decidir permanecer en su hogar y mantener su independencia y autonomía.

Los Estados Parte deberán diseñar medidas de apoyo a las familias y cuidadores mediante la introducción de servicios para quienes realizan la actividad de cuidado de la persona mayor, teniendo en cuenta las necesidades de todas las familias y otras formas de cuidados, así como la plena participación de la persona mayor, respetándose su opinión.

Los Estados Parte deberán adoptar medidas tendientes a desarrollar un sistema integral de cuidados que tenga especialmente en cuenta la perspectiva de género y el respeto a la dignidad e integridad física y mental de la persona mayor.

Para garantizar a la persona mayor el goce efectivo de sus derechos humanos en los servicios de cuidado a largo plazo, los Estados Parte se comprometen a:

- a) Establecer mecanismos para asegurar que el inicio y término de servicios de cuidado de largo plazo estén sujetos a la manifestación de la voluntad libre y expresa de la persona mayor.

- b) Promover que dichos servicios cuenten con personal especializado que pueda ofrecer una atención adecuada e integral y prevenir acciones o prácticas que puedan producir daño o agravar la condición existente.
- c) Establecer un marco regulatorio adecuado para el funcionamiento de los servicios de cuidado a largo plazo que permita evaluar y supervisar la situación de la persona mayor, incluyendo la adopción de medidas para:
 - i. Garantizar el acceso de la persona mayor a la información, en particular a sus expedientes personales, ya sean físicos o digitales, y promover el acceso a los distintos medios de comunicación e información, incluidas las redes sociales, así como informar a la persona mayor sobre sus derechos y sobre el marco jurídico y protocolos que rigen los servicios de cuidado a largo plazo.
 - ii. Prevenir injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, familia, hogar o unidad doméstica, o cualquier otro ámbito en el que se desenvuelvan, así como en su correspondencia o cualquier otro tipo de comunicación.
 - iii. Promover la interacción familiar y social de la persona mayor, teniendo en cuenta a todas las familias y sus relaciones afectivas.
 - iv. Proteger la seguridad personal y el ejercicio de la libertad y movilidad de la persona mayor.
 - v. Proteger la integridad de la persona mayor y su privacidad e intimidad en las actividades que desarrolle, particularmente en los actos de higiene personal.
- d) Establecer la legislación necesaria, conforme a los mecanismos nacionales, para que los responsables y el personal de servicios de cuidado a largo plazo respondan administrativa, civil y/o penalmente por los actos que practiquen en detrimento de la persona mayor, según corresponda.
- e) Adoptar medidas adecuadas, cuando corresponda, para que la persona mayor que se encuentre recibiendo servicios de cuidado a largo plazo cuente con servicios de cuidados paliativos que abarquen al paciente, su entorno y su familia.

Artículo 13 **Derecho a la libertad personal**

La persona mayor tiene derecho a la libertad y seguridad personal, independientemente del ámbito en el que se desenvuelva.

Los Estados Parte asegurarán que la persona mayor disfrute del derecho a la libertad y seguridad personal y que la edad en ningún caso justifique la privación o restricción arbitrarias de su libertad.

Los Estados Parte garantizarán que cualquier medida de privación o restricción de libertad será de conformidad con la ley y asegurarán que la persona mayor que se vea privada de su libertad en razón de un proceso tenga, en igualdad de condiciones con otros sectores de la población, derecho a garantías de conformidad con el derecho internacional de los derechos humanos y a ser tratada de conformidad con los objetivos y principios de la presente Convención.

Los Estados Parte garantizarán el acceso de la persona mayor privada de libertad a programas especiales y atención integral, incluidos los mecanismos de rehabilitación para su reinserción en la sociedad y, según corresponda, promoverán medidas alternativas respecto a la privación de libertad, de acuerdo con sus ordenamientos jurídicos internos.

Artículo 14

Derecho a la libertad de expresión y de opinión y al acceso a la información

La persona mayor tiene derecho a la libertad de expresión y opinión y al acceso a la información, en igualdad de condiciones con otros sectores de la población y por los medios de su elección.

Los Estados Parte adoptarán medidas destinadas a garantizar a la persona mayor el ejercicio efectivo de dichos derechos.

Artículo 15

Derecho a la nacionalidad y a la libertad de circulación

La persona mayor tiene derecho a la libertad de circulación, a la libertad para elegir su residencia y a poseer una nacionalidad en igualdad de condiciones con los demás sectores de la población, sin discriminación por razones de edad.

Los Estados Parte adoptarán medidas destinadas a garantizar a la persona mayor el ejercicio efectivo de dichos derechos.

Artículo 16

Derecho a la privacidad y a la intimidad

La persona mayor tiene derecho a la privacidad y a la intimidad y a no ser objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, familia, hogar o unidad doméstica, o cualquier ámbito en el que se desenvuelvan, así como en su correspondencia o cualquier otro tipo de comunicación.

La persona mayor tiene derecho a no ser objeto de agresiones contra su dignidad, honor y reputación, y a la privacidad en los actos de higiene o en las actividades que desarrolle, independientemente del ámbito en el que se desenvuelva.

Los Estados Parte adoptarán las medidas necesarias para garantizar estos derechos, particularmente a la persona mayor que recibe servicios de cuidado a largo plazo.

Artículo 17

Derecho a la seguridad social

Toda persona mayor tiene derecho a la seguridad social que la proteja para llevar una vida digna.

Los Estados Parte promoverán progresivamente, dentro de los recursos disponibles, que la persona mayor reciba un ingreso para una vida digna a través de los sistemas de seguridad social y otros mecanismos flexibles de protección social.

Los Estados Parte buscarán facilitar, mediante convenios institucionales, acuerdos bilaterales u otros mecanismos hemisféricos, el reconocimiento de prestaciones, aportes realizados a la seguridad social o derechos de pensión de la persona mayor migrante.

Todo lo dispuesto en este artículo será de conformidad con la legislación nacional.

Artículo 18

Derecho al trabajo

La persona mayor tiene derecho al trabajo digno y decente y a la igualdad de oportunidades y de trato respecto de los otros trabajadores, sea cual fuere su edad.

Los Estados Parte adoptarán medidas para impedir la discriminación laboral de la persona mayor. Queda prohibida cualquier distinción que no se base en las exigencias propias de la naturaleza del cargo, de conformidad con la legislación nacional y en forma apropiada a las condiciones locales.

El empleo o la ocupación debe contar con las mismas garantías, beneficios, derechos laborales y sindicales, y ser remunerado por el mismo salario aplicable a todos los trabajadores frente a iguales tareas y responsabilidades.

Los Estados Parte adoptarán las medidas legislativas, administrativas o de otra índole para promover el empleo formal de la persona mayor y regular las distintas formas de autoempleo y el empleo doméstico, con miras a prevenir abusos y garantizar una adecuada cobertura social y el reconocimiento del trabajo no remunerado.

Los Estados Parte promoverán programas y medidas que faciliten una transición gradual a la jubilación, para lo cual podrán contar con la participación de las organizaciones representativas de empleadores y trabajadores y de otros organismos interesados.

Los Estados Parte promoverán políticas laborales dirigidas a propiciar que las condiciones, el ambiente de trabajo, horarios y la organización de las tareas sean adecuadas a las necesidades y características de la persona mayor.

Los Estados Parte alentarán el diseño de programas para la capacitación y certificación de conocimiento y saberes para promover el acceso de la persona mayor a mercados laborales más inclusivos.

Artículo 19 Derecho a la salud

La persona mayor tiene derecho a su salud física y mental, sin ningún tipo de discriminación.

Los Estados Parte deberán diseñar e implementar políticas públicas intersectoriales de salud orientadas a una atención integral que incluya la promoción de la salud, la prevención y la atención de la enfermedad en todas las etapas, y la rehabilitación y los cuidados paliativos de la persona mayor a fin de propiciar el disfrute del más alto nivel de bienestar, físico, mental y social. Para hacer efectivo este derecho, los Estados Parte se comprometen a tomar las siguientes medidas:

- a) Asegurar la atención preferencial y el acceso universal, equitativo y oportuno en los servicios integrales de salud de calidad basados en la atención primaria, y aprovechar la medicina tradicional, alternativa y complementaria, de conformidad con la legislación nacional y con los usos y costumbres.
- b) Formular, implementar, fortalecer y evaluar políticas públicas, planes y estrategias para fomentar un envejecimiento activo y saludable.
- c) Fomentar políticas públicas sobre salud sexual y reproductiva de la persona mayor.
- d) Fomentar, cuando corresponda, la cooperación internacional en cuanto al diseño de políticas públicas, planes, estrategias y legislación, y el intercambio de capacidades y recursos para ejecutar planes de salud para la persona mayor y su proceso de envejecimiento.
- e) Fortalecer las acciones de prevención a través de las autoridades de salud y la prevención de enfermedades, incluyendo la realización de

- cursos de educación, el conocimiento de las patologías y opinión informada de la persona mayor en el tratamiento de enfermedades crónicas y otros problemas de salud.
- f) Garantizar el acceso a beneficios y servicios de salud asequibles y de calidad para la persona mayor con enfermedades no transmisibles y transmisibles, incluidas aquellas por transmisión sexual.
 - g) Fortalecer la implementación de políticas públicas orientadas a mejorar el estado nutricional de la persona mayor.
 - h) Promover el desarrollo de servicios socio-sanitarios integrados especializados para atender a la persona mayor con enfermedades que generan dependencia, incluidas las crónico-degenerativas, las demencias y la enfermedad de Alzheimer.
 - i) Fortalecer las capacidades de los trabajadores de los servicios de salud, sociales y socio-sanitarios integrados y de otros actores, en relación con la atención de la persona mayor, teniendo en consideración los principios contenidos en la presente Convención.
 - j) Promover y fortalecer la investigación y la formación académica profesional y técnica especializada en geriatría, gerontología y cuidados paliativos.
 - k) Formular, adecuar e implementar, según la legislación vigente en cada país, políticas referidas a la capacitación y aplicación de la medicina tradicional, alternativa y complementaria, en relación con la atención integral de la persona mayor.
 - l) Promover las medidas necesarias para que los servicios de cuidados paliativos estén disponibles y accesibles para la persona mayor, así como para apoyar a sus familias.
 - m) Garantizar a la persona mayor la disponibilidad y el acceso a los medicamentos reconocidos como esenciales por la Organización Mundial de la Salud, incluyendo los fiscalizados necesarios para los cuidados paliativos.
 - n) Garantizar a la persona mayor el acceso a la información contenida en sus expedientes personales, sean físicos o digitales.
 - o) Promover y garantizar progresivamente, y de acuerdo con sus capacidades, el acompañamiento y la capacitación a personas que ejerzan tareas de cuidado de la persona mayor, incluyendo familiares, con el fin de procurar su salud y bienestar.

Artículo 20 **Derecho a la educación**

La persona mayor tiene derecho a la educación en igualdad de condiciones con otros sectores de la población y sin discriminación, en las modalidades definidas por cada uno de los Estados Parte, y a participar en los programas educativos existentes en todos los niveles, y a compartir sus conocimientos y experiencias con todas las generaciones.

Los Estados Parte garantizarán el ejercicio efectivo del derecho a la educación de la persona mayor y se comprometen a:

- a) Facilitar a la persona mayor el acceso a programas educativos y de formación adecuados que permitan el acceso, entre otros, a los distintos niveles del ciclo educativo, a programas de alfabetización y postalfabetización, formación técnica y profesional, y a la educación permanente continua, en especial a los grupos en situación de vulnerabilidad.
- b) Promover el desarrollo de programas, materiales y formatos educativos adecuados y accesibles para la persona mayor que atiendan sus necesidades, preferencias, aptitudes, motivaciones e identidad cultural.
- c) Adoptar las medidas necesarias para reducir y, progresivamente, eliminar las barreras y las dificultades de acceso a los bienes y servicios educativos en el medio rural.
- d) Promover la educación y formación de la persona mayor en el uso de las nuevas tecnologías de la información y comunicación (TIC) para minimizar la brecha digital, generacional y geográfica e incrementar la integración social y comunitaria.
- e) Diseñar e implementar políticas activas para erradicar el analfabetismo de la persona mayor y, en especial, de las mujeres y grupos en situación de vulnerabilidad.
- f) Fomentar y facilitar la participación activa de la persona mayor en actividades educativas tanto formales como no formales.

Artículo 21 **Derecho a la cultura**

La persona mayor tiene derecho a su identidad cultural, a participar en la vida cultural y artística de la comunidad, al disfrute de los beneficios del progreso científico y tecnológico y de otros productos de la diversidad cultural, así como a

compartir sus conocimientos y experiencias con otras generaciones, en cualquiera de los contextos en los que se desarrolle.

Los Estados Parte reconocerán, garantizarán y protegerán el derecho a la propiedad intelectual de la persona mayor, en condiciones de igualdad con los demás sectores de la población y de acuerdo con la legislación interna y los instrumentos internacionales adoptados en este ámbito.

Los Estados Parte promoverán las medidas necesarias para asegurar el acceso preferencial de la persona mayor a los bienes y servicios culturales, en formatos y condiciones asequibles.

Los Estados Parte fomentarán programas culturales para que la persona mayor pueda desarrollar y utilizar su potencial creativo, artístico e intelectual, para su beneficio y para el enriquecimiento de la sociedad como agente transmisor de valores, conocimientos y cultura.

Los Estados Parte impulsarán la participación de las organizaciones de personas mayores en la planificación, realización y divulgación de proyectos educativos y culturales.

Los Estados Parte incentivarán, mediante acciones de reconocimiento y estímulo, los aportes de la persona mayor a las diferentes expresiones artísticas y culturales.

Artículo 22

Derecho a la recreación, al esparcimiento y al deporte

La persona mayor tiene derecho a la recreación, la actividad física, el esparcimiento y el deporte.

Los Estados Parte promoverán el desarrollo de servicios y programas de recreación, incluido el turismo, así como actividades de esparcimiento y deportivas que tengan en cuenta los intereses y las necesidades de la persona mayor, en particular de aquella que recibe servicios de cuidado a largo plazo, con el objeto de mejorar su salud y calidad de vida en todas sus dimensiones y promover su autorrealización, independencia, autonomía e inclusión en la comunidad.

La persona mayor podrá participar en el establecimiento, gestión y evaluación de dichos servicios, programas o actividades.

Artículo 23

Derecho a la propiedad

Toda persona mayor tiene derecho al uso y goce de sus bienes y a no ser privada de estos por motivos de edad. La ley puede subordinar tal uso y goce al interés social.

Ninguna persona mayor puede ser privada de sus bienes, excepto mediante el pago de indemnización justa, por razones de utilidad pública o de interés social y en los casos y según las formas establecidas por la ley.

Los Estados Parte adoptarán todas las medidas necesarias para garantizarle a la persona mayor el ejercicio del derecho a la propiedad, incluida la libre disposición de sus bienes, y para prevenir el abuso y la enajenación ilegal de su propiedad.

Los Estados Parte se comprometen a adoptar medidas para eliminar toda práctica administrativa o financiera que discrimine a la persona mayor, principalmente a las mujeres mayores y a los grupos en situación de vulnerabilidad respecto del ejercicio de su derecho a la propiedad.

Artículo 24

Derecho a la vivienda

La persona mayor tiene derecho a una vivienda digna y adecuada, y a vivir en entornos seguros, saludables, accesibles y adaptables a sus preferencias y necesidades.

Los Estados Parte deberán adoptar las medidas pertinentes para promover el pleno goce de este derecho y facilitar que la persona mayor tenga acceso a servicios socio-sanitarios integrados y servicios de cuidados domiciliarios que le permitan residir en su propio domicilio conforme a su voluntad.

Los Estados Parte deberán garantizar el derecho de la persona mayor a una vivienda digna y adecuada y adoptarán políticas de promoción del derecho a la vivienda y el acceso a la tierra reconociendo las necesidades de la persona mayor y la prioridad en la asignación a aquella que se encuentre en situación de vulnerabilidad. Asimismo, los Estados Parte fomentarán progresivamente el acceso al crédito de vivienda u otras formas de financiamiento sin discriminación, promoviendo, entre otros, la colaboración con el sector privado, la sociedad civil y otros actores sociales. Las políticas deberán tener especialmente en cuenta:

- a) La necesidad de construir o adaptar progresivamente soluciones habitacionales con el fin de que estas sean arquitectónicamente adecuadas y accesibles a los adultos mayores con discapacidad y con impedimentos relacionados con su movilidad.
- b) Las necesidades específicas de la persona mayor, particularmente aquellas que viven solas, a través de subsidios para el alquiler, apoyo a las renovaciones de la vivienda y otras medidas pertinentes, según la capacidad de los Estados Parte.

Los Estados Parte promoverán el establecimiento de procedimientos expeditos de reclamación y justicia en caso de desalojos de personas mayores y adoptarán las medidas necesarias para protegerlas contra los desalojos forzosos ilegales.

Los Estados Parte deberán promover programas para la prevención de accidentes en el entorno y el hogar de la persona mayor.

Artículo 25

Derecho a un medio ambiente sano

La persona mayor tiene derecho a vivir en un medio ambiente sano y a contar con servicios públicos básicos, a tal fin los Estados Parte adoptarán las medidas pertinentes para salvaguardar y promover el ejercicio de este derecho, entre ellas:

- a) Fomentar el desarrollo pleno de la persona mayor en armonía con la naturaleza.
- b) Garantizar el acceso de la persona mayor en condiciones de igualdad a servicios públicos básicos de agua potable y saneamiento, entre otros.

Artículo 26

Derecho a la accesibilidad y a la movilidad personal

La persona mayor tiene derecho a la accesibilidad al entorno físico, social, económico y cultural, y a su movilidad personal.

A fin de garantizar la accesibilidad y la movilidad personal de la persona mayor para que pueda vivir en forma independiente y participar plenamente en todos los aspectos de la vida, los Estados Parte adoptarán de manera progresiva medidas pertinentes para asegurar el acceso de la persona mayor, en igualdad de condiciones con las demás, al entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público, tanto en zonas urbanas como rurales. Estas medidas, que incluirán la identificación y eliminación de obstáculos y barreras de acceso, se aplicarán, entre otras cosas, a:

- a) Los edificios, las vías públicas, el transporte y otras instalaciones exteriores e interiores como centros educativos, viviendas, instalaciones médicas y lugares de trabajo.
- b) Los servicios de información, comunicaciones y de otro tipo, incluidos los servicios electrónicos y de emergencia.

Los Estados Parte también adoptarán las medidas pertinentes para:

- a) Desarrollar, promulgar y supervisar la aplicación de normas mínimas y directrices sobre la accesibilidad de las instalaciones y los servicios abiertos al público o de uso público.

- b) Asegurar que las entidades públicas y privadas que proporcionan instalaciones y servicios abiertos al público o de uso público tengan en cuenta todos los aspectos de su accesibilidad para la persona mayor.
- c) Ofrecer formación a todas las personas involucradas en los problemas de accesibilidad que enfrenta la persona mayor.
- d) Promover otras formas adecuadas de asistencia y apoyo a la persona mayor para asegurar su acceso a la información.
- e) Promover el acceso de la persona mayor a los nuevos sistemas y tecnologías de la información y las comunicaciones, incluida Internet y que estas sean accesibles al menor costo posible.
- f) Propiciar el acceso a tarifas preferenciales o gratuitas de los servicios de transporte público o de uso público a la persona mayor.
- g) Promover iniciativas en los servicios de transporte público o de uso público para que haya asientos reservados para la persona mayor, los cuales deberán ser identificados con la señalización correspondiente.
- h) Dotar a los edificios y otras instalaciones abiertas al público de señalización en formatos de fácil lectura, comprensión y adecuados para la persona mayor.

Artículo 27 **Derechos políticos**

La persona mayor tiene derecho a la participación en la vida política y pública en igualdad de condiciones con los demás y a no ser discriminados por motivo de edad.

La persona mayor tiene derecho a votar libremente y ser elegido, debiendo el Estado facilitar las condiciones y los medios para ejercer esos derechos.

Los Estados Parte garantizarán a la persona mayor una participación plena y efectiva en su derecho a voto y adoptarán las siguientes medidas pertinentes para:

- a) Garantizar que los procedimientos, instalaciones y materiales electorales sean adecuados, accesibles y fáciles de entender y utilizar.
- b) Proteger el derecho de la persona mayor a emitir su voto en secreto en elecciones y referendos públicos, sin intimidación.

- c) Garantizar la libre expresión de la voluntad de la persona mayor como elector y a este fin, cuando sea necesario y con su consentimiento, permitir que una persona de su elección le preste asistencia para votar.
- d) Crear y fortalecer mecanismos de participación ciudadana con el objeto de incorporar en los procesos de toma de decisión en todos los niveles de Gobierno las opiniones, aportes y demandas de la persona mayor y de sus agrupaciones y asociaciones.

Artículo 28 **Derecho de reunión y de asociación**

La persona mayor tiene derecho a reunirse pacíficamente y a formar libremente sus propias agrupaciones o asociaciones, de conformidad con el derecho internacional de los derechos humanos.

A tal fin los Estados Parte se comprometen a:

- a) Facilitar la creación y el reconocimiento legal de dichas agrupaciones o asociaciones, respetando su libertad de iniciativa y prestándoles apoyo para su formación y desempeño de acuerdo con la capacidad de los Estados Parte.
- b) Fortalecer las asociaciones de personas mayores y el desarrollo de liderazgos positivos que faciliten el logro de sus objetivos y la difusión de los derechos enunciados en la presente Convención.

Artículo 29 **Situaciones de riesgo y emergencias humanitarias**

Los Estados Parte tomarán todas las medidas específicas que sean necesarias para garantizar la integridad y los derechos de la persona mayor en situaciones de riesgo, incluidas situaciones de conflicto armado, emergencias humanitarias y desastres, de conformidad con las normas de derecho internacional, en particular del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario.

Los Estados Parte adoptarán medidas de atención específicas a las necesidades de la persona mayor en la preparación, prevención, reconstrucción y recuperación en situaciones de emergencias, desastres o conflictos.

Los Estados Parte propiciarán que la persona mayor interesada participe en los protocolos de protección civil en caso de desastres naturales.

Artículo 30

Igual reconocimiento como persona ante la ley

Los Estados Parte reafirman que la persona mayor tiene derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica.

Los Estados Parte reconocerán que la persona mayor tiene capacidad jurídica en igualdad de condiciones con las demás en todos los aspectos de la vida.

Los Estados Parte adoptarán las medidas pertinentes para proporcionar acceso a la persona mayor al apoyo que puedan necesitar en el ejercicio de su capacidad jurídica.

Los Estados Parte asegurarán que en todas las medidas relativas al ejercicio de la capacidad jurídica se proporcionen salvaguardias adecuadas y efectivas para impedir los abusos de conformidad con el derecho internacional en materia de derechos humanos. Esas salvaguardias asegurarán que las medidas relativas al ejercicio de la capacidad jurídica respeten los derechos, la voluntad y las preferencias de la persona mayor, que no haya conflicto de intereses ni influencia indebida, que sean proporcionales y adaptadas a las circunstancias de la persona mayor, que se apliquen en el plazo más corto posible y que estén sujetas a exámenes periódicos por parte de una autoridad o un órgano judicial competente, independiente e imparcial. Las salvaguardias serán proporcionales al grado en que dichas medidas afecten a los derechos e intereses de la persona mayor.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el presente artículo, los Estados Parte tomarán todas las medidas que sean pertinentes y efectivas para garantizar el derecho de la persona mayor, en igualdad de condiciones con las demás, a ser propietaria y heredar bienes, controlar sus propios asuntos económicos y tener acceso en igualdad de condiciones a préstamos bancarios, hipotecas y otras modalidades de crédito financiero, y velarán por que la persona mayor no sea privada de sus bienes de manera arbitraria.

Artículo 31

Acceso a la justicia

La persona mayor tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.

Los Estados Parte se comprometen a asegurar que la persona mayor tenga acceso efectivo a la justicia en igualdad de condiciones con las demás, incluso mediante la adopción de ajustes de procedimiento en todos los procesos judiciales y administrativos en cualquiera de sus etapas.

Los Estados Parte se comprometen a garantizar la debida diligencia y el tratamiento preferencial a la persona mayor para la tramitación, resolución y ejecución de las decisiones en procesos administrativos y judiciales.

La actuación judicial deberá ser particularmente expedita en casos en que se encuentre en riesgo la salud o la vida de la persona mayor.

Asimismo, los Estados Parte desarrollarán y fortalecerán políticas públicas y programas dirigidos a promover:

- a) Mecanismos alternativos de solución de controversias.
- b) Capacitación del personal relacionado con la administración de justicia, incluido el personal policial y penitenciario, sobre la protección de los derechos de la persona mayor.

CAPÍTULO V TOMA DE CONCIENCIA

Artículo 32

Los Estados Parte acuerdan:

- a) Adoptar medidas para lograr la divulgación y capacitación progresiva de toda la sociedad sobre la presente Convención.
- b) Fomentar una actitud positiva hacia la vejez y un trato digno, respetuoso y considerado hacia la persona mayor y, sobre la base de una cultura de paz, impulsar acciones de divulgación, promoción de los derechos y empoderamiento de la persona mayor, así como evitar el lenguaje e imágenes estereotipadas sobre la vejez.
- c) Desarrollar programas para sensibilizar a la población sobre el proceso de envejecimiento y sobre la persona mayor, fomentando la participación de ésta y de sus organizaciones en el diseño y formulación de dichos programas.
- d) Promover la inclusión de contenidos que propicien la comprensión y aceptación de la etapa del envejecimiento en los planes y programas de estudios de los diferentes niveles educativos, así como en las agendas académicas y de investigación.
- e) Promover el reconocimiento de la experiencia, la sabiduría, la productividad y la contribución al desarrollo que la persona mayor brinda a la sociedad en su conjunto.

CAPÍTULO VI MECANISMO DE SEGUIMIENTO DE LA CONVENCIÓN Y MEDIOS DE PROTECCIÓN

Artículo 33 Mecanismo de Seguimiento

Con el fin de dar seguimiento a los compromisos adquiridos y promover la efectiva implementación de la presente Convención se establece un mecanismo de seguimiento integrado por una Conferencia de Estados Parte y un Comité de Expertos.

El Mecanismo de Seguimiento quedará constituido cuando se haya recibido el décimo instrumento de ratificación o adhesión.

Las funciones de la secretaría del Mecanismo de Seguimiento serán ejercidas por la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos.

Artículo 34 Conferencia de Estados Parte

La Conferencia de Estados Parte es el órgano principal del Mecanismo de Seguimiento, está integrada por los Estados Parte en la Convención y tiene, entre otras, las siguientes funciones:

- a) Dar seguimiento al avance de los Estados Parte en el cumplimiento de los compromisos emanados de la presente Convención.
- b) Elaborar su reglamento y aprobarlo por mayoría absoluta.
- c) Dar seguimiento a las actividades desarrolladas por el Comité de Expertos y formular recomendaciones con el objetivo de mejorar el funcionamiento, las reglas y procedimientos de dicho Comité.
- d) Recibir, analizar y evaluar las recomendaciones del Comité de Expertos y formular las observaciones pertinentes.
- e) Promover el intercambio de experiencias, buenas prácticas y la cooperación técnica entre los Estados Parte con miras a garantizar la efectiva implementación de la presente Convención.
- f) Resolver cualquier asunto relacionado con el funcionamiento del Mecanismo de Seguimiento.

El Secretario General de la Organización de los Estados Americanos convocará la primera reunión de la Conferencia de Estados Parte dentro de los noventa días de haberse constituido el Mecanismo de Seguimiento. La primera reunión de la Conferencia será celebrada en la sede de la Organización, a menos que un Estado Parte ofrezca la sede, para aprobar su reglamento y metodología de trabajo, así como para elegir a sus autoridades. Dicha reunión será presidida por un representante del Estado que deposite el primer instrumento de ratificación o adhesión de la presente Convención.

Las reuniones ulteriores serán convocadas por el Secretario General de la Organización de los Estados Americanos a solicitud de cualquier Estado Parte, con la aprobación de dos tercios de los mismos. En ellas podrán participar como observadores los demás Estados Miembros de la Organización.

Artículo 35 Comité de Expertos

El Comité estará integrado por expertos designados por cada uno de los Estados Parte en la Convención. El quórum para sesionar será establecido en su reglamento.

El Comité de Expertos tiene las siguientes funciones:

- a) Colaborar en el seguimiento al avance de los Estados Parte en la implementación de la presente Convención, siendo responsable del análisis técnico de los informes periódicos presentados por los Estados Parte. A tales efectos, los Estados Parte se comprometen a presentar un informe al Comité de Expertos con relación al cumplimiento de las obligaciones contenidas en la presente Convención, dentro del año siguiente de haberse realizado la primera reunión. De allí en adelante, los Estados Parte presentarán informes cada cuatro años.
- b) Presentar recomendaciones para el cumplimiento progresivo de la Convención sobre la base de los informes presentados por los Estados Parte de conformidad con el tema objeto de análisis.
- c) Elaborar y aprobar su propio reglamento en el marco de las funciones establecidas en el presente artículo.

El Secretario General de la Organización de los Estados Americanos convocará la primera reunión del Comité de Expertos dentro de los noventa días de haberse constituido el Mecanismo de Seguimiento. La primera reunión del Comité de Expertos será celebrada en la sede de la Organización, a menos que un Estado Parte ofrezca la sede, para aprobar su reglamento y metodología de trabajo, así como para elegir a sus autoridades. Dicha reunión será presidida por un representante del Estado que deposite el primer instrumento de ratificación o adhesión de la presente Convención.

El Comité de Expertos tendrá su sede en la Organización de los Estados Americanos.

Artículo 36

Sistema de peticiones individuales

Cualquier persona o grupo de personas, o entidad no gubernamental legalmente reconocida en uno o más Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos, puede presentar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos peticiones que contengan denuncias o quejas de violación de alguno de los artículos de la presente Convención por un Estado Parte.

Para el desarrollo de lo previsto en el presente artículo se tendrá en cuenta la naturaleza progresiva de la vigencia de los derechos económicos, sociales y culturales objeto de protección por la presente Convención.

Asimismo, todo Estado Parte puede, en el momento del depósito de su instrumento de ratificación o de adhesión a la presente Convención, o en cualquier momento posterior, declarar que reconoce la competencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para recibir y examinar las comunicaciones en que un Estado Parte alegue que otro Estado Parte ha incurrido en violaciones de los derechos humanos establecidos en la presente Convención. En dicho caso, se aplicarán todas las normas de procedimiento pertinentes contenidas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Los Estados Parte podrán formular consultas a la Comisión en cuestiones relacionadas con la efectiva aplicación de la presente Convención. Asimismo, podrán solicitar a la Comisión asesoramiento y cooperación técnica para asegurar la aplicación efectiva de cualquiera de las disposiciones de la presente Convención. La Comisión, dentro de sus posibilidades, les brindará asesoramiento y asistencia cuando le sean solicitados.

Todo Estado Parte puede, en el momento del depósito de su instrumento de ratificación o de adhesión a la presente Convención, o en cualquier momento posterior, declarar que reconoce como obligatoria y de pleno derecho y sin acuerdo especial la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre todos los casos relativos a la interpretación o aplicación de la presente Convención. En dicho caso, se aplicarán todas las normas de procedimiento pertinentes contenidas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

CAPÍTULO VII

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 37

Firma, ratificación, adhesión y entrada en vigor

La presente Convención está abierta a la firma, ratificación y adhesión por parte de todos los Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos.

Después de que entre en vigor, todos los Estados Miembros de la Organización que no la hayan firmado estarán en posibilidad de adherirse a la Convención.

Esta Convención está sujeta a ratificación por parte de los Estados signatarios de acuerdo con sus respectivos procedimientos constitucionales. Los instrumentos de ratificación o adhesión se depositarán en la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos.

La presente Convención entrará en vigor el trigésimo día a partir de la fecha en que se haya depositado el segundo instrumento de ratificación o adhesión en la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos.

Para cada Estado que ratifique o se adhiera a la presente Convención después de que haya sido depositado el segundo instrumento de ratificación o adhesión, la Convención entrará en vigor el trigésimo día a partir de la fecha en que tal Estado haya depositado el instrumento correspondiente.

Artículo 38 Reservas

Los Estados Parte podrán formular reservas a la Convención en el momento de su firma, ratificación o adhesión, siempre que no sean incompatibles con el objeto y fin de la Convención y versen sobre una o más de sus disposiciones específicas.

Artículo 39 Denuncia

La Convención permanecerá en vigor indefinidamente, pero cualquiera de los Estados Parte podrá denunciarla mediante notificación escrita dirigida al Secretario General de la Organización de los Estados Americanos. Transcurrido un año contado a partir de la fecha de depósito del instrumento de denuncia, la Convención cesará en sus efectos para dicho Estado, permaneciendo en vigor para los demás Estados Parte. La denuncia no eximirá al Estado Parte de las obligaciones impuestas por la presente Convención con respecto a toda acción u omisión ocurrida antes de la fecha en que la denuncia haya entrado en vigor.

Artículo 40 Depósito

El instrumento original de la Convención, cuyos textos en español, francés, inglés y portugués son igualmente auténticos, será depositado en la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos, la que enviará copia certificada de su texto para su registro y publicación a la Secretaría de las Naciones Unidas, de conformidad con el artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas.

**Artículo 41
Enmiendas**

Cualquier Estado Parte puede someter a la Conferencia de Estados Parte propuestas de enmiendas a esta Convención.

Las enmiendas entrarán en vigor para los Estados ratificantes de las mismas en la fecha en que dos tercios de los Estados Parte hayan depositado el respectivo instrumento de ratificación. En cuanto al resto de los Estados Parte, entrarán en vigor en la fecha en que depositen sus respectivos instrumentos de ratificación.

Rige a partir de su publicación.

Dado en la Presidencia de la República, San José, a los dieciséis días del mes de setiembre de dos mil quince.

Luis Guillermo Solís Rivera
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Manuel A. González Sanz
MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO

9 de noviembre de 2015

NOTA: Este proyecto pasó a estudio e informe de la Comisión Permanente Especial de Derechos Humanos.

1 vez.—Solicitud N° 44256.—O. C. N° 25272.—(IN2015081912).

INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS

BANCO CENTRAL DE COSTA RICA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE OCTUBRE DEL 2015 (Cifras en colones)

	Notas	31/10/2015	30/09/2015
ACTIVOS		4.679.418.953.741,27	4.682.161.770.384,97
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	No. 1	1.861.821.231.421,62	1.766.487.566.507,49
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO		1.861.821.231.421,62	1.766.487.566.507,49
INVERSIONES EN VALORES	No. 2	2.356.839.721.445,37	2.535.559.641.586,48
VALORES EMITIDOS POR NO RESID MON EXTRANJERA		2.356.839.721.445,37	2.535.559.641.586,48
PRESTAMOS POR COBRAR	No. 3	33.322.118.539,50	16.283.439,50
CREDITOS OTORGADOS		33.322.118.539,50	16.283.439,50
INTERESES Y COMISIONES POR COBRAR	No. 4	4.442.020.990,66	3.903.879.897,39
APORTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES	No. 5	383.423.405.303,54	336.684.971.029,15
APORTES A INSTITUCIONES FINAN. INT. MONETARIAS		124.972.016.493,28	125.772.961.963,12
APORTES A INSTITUC. FINAN.INT. NO MONETARIAS	No. 6	258.451.388.810,26	210.912.009.066,03
PROPIEDAD, MOBILIARIO Y EQUIPO		33.990.807.949,30	34.177.923.245,57
PROPIEDADES Y EQUIPOS		33.990.807.949,30	34.177.923.245,57
ACTIVOS INTANGIBLES	No. 7	2.854.220.553,81	2.674.281.062,11
SOFTWARE Y LICENCIAS		2.854.220.553,81	2.674.281.062,11
OTROS ACTIVOS	No. 8	2.725.427.537,47	2.657.223.617,28
OTROS ACTIVOS		2.725.427.537,47	2.657.223.617,28
PASIVOS		6.695.132.273.691,68	6.668.976.113.629,20
BILLETES Y MONEDAS EN CIRCULACION	No. 9	868.253.718.825,00	821.107.492.595,00
EMISION MONETARIA		868.253.718.825,00	821.107.492.595,00
DEPOSITOS	No. 10	2.696.884.848.790,50	2.592.392.268.128,49
DEPOSITOS MONETARIOS		1.194.588.912.101,85	1.135.530.016.234,83
OTROS DEPOSITOS MONETARIOS		1.502.295.936.688,65	1.456.862.251.893,66
PRESTAMOS POR PAGAR	No. 11	10.356.011.379,91	10.372.484.417,18
EMPRESITOS Y DEPÓSITOS		10.356.011.379,91	10.372.484.417,18
INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	No. 12	49.231.242.489,48	34.061.617.030,95
PASIVOS CON ORGANISMOS INTERNACIONALES	No. 13	228.611.885.437,30	230.096.517.781,90
OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INT. MONETARIOS		225.008.788.027,59	226.477.064.617,15
OBLIGACIONES CON ORG.INT.FINAN NO MONETARIOS		3.603.097.409,71	3.619.453.164,75
EMISIONES DE DEUDA	No. 14	2.817.128.272.386,74	2.952.824.277.741,51
EMISIONES DE DEUDA		2.817.128.272.386,74	2.952.824.277.741,51
OTROS PASIVOS	No. 15	24.666.294.382,75	28.121.455.934,17
OTROS PASIVOS		24.666.294.382,75	28.121.455.934,17
PATRIMONIO		(1.934.257.485.656,11)	(1.934.214.766.559,87)
CAPITAL		5.000.000,00	5.000.000,00
CAPITAL		5.000.000,00	5.000.000,00
RESERVA LEGAL		10.000.000,00	10.000.000,00
RESERVA LEGAL		10.000.000,00	10.000.000,00
CAPITALIZACION GUBERNAMENTAL		290.927.458.015,86	290.927.458.015,86
CAPITALIZACION Y AMORT DE OPER. CUASIFISCALES		290.927.458.015,86	290.927.458.015,86
RESULTADOS ACUMULADOS		(2.225.199.943.671,97)	(2.225.157.224.575,73)
ESTABILIZACION MONETARIA		(2.486.358.004.290,85)	(2.486.358.004.290,85)
OPERACION		62.047.861.296,86	62.090.580.393,10
RESERVA POR FLUCTUACIONES DE TIPO DE CAMBIO		170.607.446.408,43	170.607.446.408,43
AJUSTE DE ADOPCION DE NIIF POR PRIMERA VEZ		28.502.752.913,59	28.502.752.913,59

RESULTADO DEL PERIODO	(81.455.834.294,30)	(52.599.576.684,36)
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	4.679.418.953.741,27	4.682.161.770.384,97
CUENTAS DE ORDEN	33.103.717.260.894,69	33.238.308.329.360,45

No. 17

Aprobado por : Eduardo Prado Zúñiga
Gerente

Autorizado por: Mauricio Guevara Guzmán
Director a.i Depto Contabilidad

Refrendado por: Ronald Fernández Gamboa
Auditor Interno a.i

Las notas adjuntas son parte integrante de los Estados Financieros

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE OCTUBRE DEL 2015 (Cifras en colones)

	<u>31/10/2015</u>	<u>30/09/2015</u>
NOTA: 1 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO		
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO		
TENENCIAS EN DERECHOS ESPECIALES DE GIRO	99.171.025.910,00	99.814.991.020,05
BILLETES Y MONEDAS EXTRANJERAS	224.014.342,08	239.975.925,32
DEPOSITOS EN BANCOS DEL EXTERIOR EN MONEDA EXTRANJERA	19.242.755.809,54	23.982.494.362,12
DEPOSITOS A PLAZO EN BANCOS DEL EXTERIOR EN MONEDA EXTRANJERA	1.743.183.435.360,00	1.642.450.105.200,00
TOTAL	1.861.821.231.421,62	1.766.487.566.507,49

NOTA: 2 INVERSIONES EN VALORES

VALORES EMITIDOS POR NO RESIDENTES EN MONEDA EXTRANJERA	2.357.197.638.597,24	2.535.828.909.940,91
VALORES EMITIDOS POR NO RESIDENTES EN MONEDA EXTRANJERA	1.157.987.955.330,52	1.162.281.725.956,83
Mas BONOS VALOR TRANSADO	1.200.988.692.851,12	1.373.244.701.733,89
INVERSION EN TITULOS MERCADO DE DINERO		

INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS	322.420.907,97	581.739.024,88
Menos VALOR DE MERCADO	2.101.430.492,37	279.256.774,69
INVERSION EN TITULOS MERCADO DE DINERO	<u>(357.917.151,87)</u>	<u>(269.268.354,43)</u>
COMPROMISOS - NEGOCIACION INSTRUMENTOS FINANCIEROS	2.356.839.721.445,37	2.535.559.641.586,48
Mas INVERSIONES POR RECIBIR	381.285.649.942,42	207.544.863.667,62
INVERSIONES POR COBRAR	48.580.703.056,32	88.170.705.939,42
Menos INVERSIONES POR PAGAR	<u>(381.285.649.942,42)</u>	<u>(207.544.863.667,62)</u>
INVERSIONES POR ENTREGAR	0,00	0,00
TOTAL	<u>2.356.839.721.445,37</u>	<u>2.535.559.641.586,48</u>

NOTA: 3 PRESTAMOS POR COBRAR

CREDITOS OTORGADOS		0,00
PRESTAMOS OTORGADOS A RESIDENTES EN MONEDA NACIONAL	33.300.000.000,00	
PRESTAMOS DE MEDIANO Y LARGO PLAZO CON RECURSOS EXTERNOS EN MONEDA NACIONAL VENCIDOS	131.395.918,19	131.395.918,19
Mas SUMAS POR COBRAR A ENTIDADES SUPERVISADAS	18.767.075,34	18.767.075,34
CUENTAS POR COBRAR A ENTIDADES SUPERVISADAS	<u>530.294.320,00</u>	<u>543.226.295,34</u>
Menos ESTIMACION PARA VALUACION DE ACTIVOS	<u>(658.338.774,03)</u>	<u>(658.338.774,03)</u>
TOTAL	<u>33.322.118.539,50</u>	<u>16.283.439,50</u>

NOTA: 4 INTERESES Y COMISIONES POR COBRAR

INTERESES Y COMISIONES EN MONEDA NACIONAL Y MONEDA EXTRANJERA		
INTERESES, COMISIONES Y OTROS PRODUCTOS POR RECIBIR DE NO RESIDENTES EN MONEDA EXTRANJERA	4.422.939.444,21	3.887.804.600,93
INTERESES COMISIONES Y OTROS PRODUCTOS POR RECIBIR DE RESIDENTES EN MONEDA NACIONAL VIGENTES	19.081.546,45	16.075.296,46
TOTAL	<u>4.442.020.990,66</u>	<u>3.903.879.897,39</u>

NOTA: 5 APORTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES

APORTES A INSTITUCIONES FINAN. INTERNACIONALES MONETARIAS		
APORTES DE CAPITAL DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL	122.828.656.493,28	123.626.241.963,12
APORTES AL FONDO CENTROAMERICANO DE ESTABILIZACION MONETARIA	2.143.360.000,00	2.146.720.000,00
APORTES A INSTITUCIONES FINAN. INTERNACIONALES NO MONETARIAS		
ACCIONES DE CAPITAL DEL BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION Y FOMENTO	1.044.599.503,74	1.046.237.051,49

ACCIONES DE CAPITAL DE LA CORPORACION FINANCIERA INTERNACIONAL	510.119.680,00	510.919.360,00
APORTES DE CAPITAL DE LA ASOCIACION INTERNACIONAL DE FOMENTO	27.118.654,45	27.148.883,96
ACCIONES DE CAPITAL DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	26.132.757.135,76	26.173.723.685,45
ACCIONES DE CAPITAL DEL BANCO LATINOAMERICANO DE EXPORTACION	402.111.788,31	402.742.151,67
APORTES DE CAPITAL DEL BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACION	29.471.200.000,00	29.517.400.000,00
APORTES DE CAPITAL A ORGANISMOS INTERNACIONALES	200.863.482.048,00	153.233.837.933,46
TOTAL	383.423.405.303,54	336.684.971.029,15

NOTA: 6 PROPIEDAD, MOBILIARIO Y EQUIPO

PROPIEDADES Y EQUIPOS		
BIENES MUEBLES	11.308.063.281,27	11.338.323.132,21
Menos DEPRECIACION ACUMULADA	(7.967.819.992,37)	(7.871.134.884,92)
MUSEO	2.389.452.052,97	2.389.452.052,97
BIENES INMUEBLES	35.104.324.824,19	35.104.324.824,19
COSTO HISTORICO DE BIENES INMUEBLES		
Menos DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	(6.843.212.216,76)	(6.783.041.878,88)
TOTAL	33.990.807.949,30	34.177.923.245,57

NOTA: 7 ACTIVOS INTANGIBLES

SOFTWARE Y LICENCIAS		
BIENES INTANGIBLES	2.277.643.221,86	2.164.442.918,56
Menos AMORTIZACION ACUMULADA	(1.489.691.384,76)	(1.460.793.974,39)
APLICACIONES AUTOMATICAS EN DESARROLLO	2.066.268.716,71	1.970.632.117,94
TOTAL	2.854.220.553,81	2.674.281.062,11

NOTA: 8 OTROS ACTIVOS

OTROS ACTIVOS		
ORO NO REFINADO	1.016.309,62	993.483,55
ORO AMONEDADO	12.313.308,49	12.332.611,23
DEPOSITO EN EL EXTERIOR, SISTEMA INTERCONEXION DE PAGOS REGIONAL	53.611.376,07	53.698.998,64
VARIOS DEUDORES NO RESIDENTES EN MONEDA EXTRANJERA	1.335.506,18	1.587.080,83
CHEQUES Y VALORES COMPENSADOS POR LIQUIDAR EN MONEDA NACIONAL	1.475.162,00	0,00
ADELANTOS EN MONEDA NACIONAL Y MONEDA EXTRANJERA CONTABILIZADOS EN MONEDA NACIONAL	33.008.416,31	18.983.220,81
DEPOSITOS EN GARANTIA EN MONEDA NACIONAL	975.000,00	975.000,00

VARIOS DEUDORES EN MONEDA NACIONAL	2.482.137.146,21	2.423.262.809,63	
Menos SUMAS POR COBRAR A ENTIDADES FINANCIERAS	(18.767.075,34)	(18.767.075,34)	
CUENTAS POR COBRAR ENTIDADES SUPERVISADAS	(530.294.320,00)	(524.459.220,00)	1.880.036.514,29
ACTIVOS DIVERSOS	366.691.707,84	366.691.707,84	
Menos DEPREC. ACUMULADA ACTIVOS DISP PARA LA VENTA	(23.909.342,88)	(23.909.342,88)	342.782.364,96
BIENES FIDEICOMETIDOS	1.724.471.844,39	1.724.471.844,39	
Menos RECUPERACION DE CARTERA DEL FIDEICOMISO	(1.378.637.501,42)	(1.378.637.501,42)	345.834.342,97
TOTAL	2.725.427.537,47	2.657.223.617,28	

NOTA: 9 BILLETES Y MONEDAS EN CIRCULACION

EMISION MONETARIA	868.253.718.825,00	821.107.492.595,00	
EMISION MONETARIA.	868.253.718.825,00	821.107.492.595,00	

NOTA: 10 DEPOSITOS

DEPOSITOS MONETARIOS	1.194.588.912.101,85	1.135.530.016.234,83	
DEPOSITOS MONETARIOS.			
OTROS DEPOSITOS MONETARIOS	160.609.105.451,09	153.795.183.427,41	
DEPOSITOS MONETARIOS DE OTRAS ENTIDADES EN MONEDA NACIONAL	(1.378.637.501,42)	(1.378.637.501,42)	152.416.545.925,99
Menos RECUPERACION DE CARTERA DEL FIDEICOMISO	2.717.076.208,48	2.882.747.321,26	
DEPOSITOS MONETARIOS DEL PUBLICO EN MONEDA NACIONAL	54.938.347,37	57.682.674,66	
DEPOSITOS REMUNERADOS	1.026.300.784.011,89	1.015.429.686.415,37	
DEPOSITOS A LA VISTA DE RESIDENTES EN MONEDA EXTRANJERA	150.232.961.010,48	169.604.279.963,46	
DEPOSITOS DEL GOBIERNO CENTRAL EN MONEDA EXTRANJERA	163.759.709.160,76	116.471.309.592,92	
DEPOSITOS DEL GOBIERNO CENTRAL EN MONEDA NACIONAL	2.696.884.848.790,50	2.592.392.268.128,49	

NOTA: 11 PRESTAMOS POR PAGAR

EMPRESITOS Y DEPÓSITOS	10.356.011.379,91	10.372.484.417,18	
EMPRESITOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO EN MONEDA EXTRANJERA	10.356.011.379,91	10.372.484.417,18	

TOTAL

NOTA: 12 INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR

INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR EN M/E Y M/N	136.177.857,36	105.888.419,99	
INTERESES,COMISIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR A NO RESIDENTES EN MONEDA EXTRANJERA	464.231.735,26	2.374.831.992,22	
INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR			

A RESIDENTES EN MONEDA EXTRANJERA						31.580.896.618,74
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR			48.630.832.896,86			
A RESIDENTES EN MONEDA NACIONAL						
TOTAL			49.231.242.489,48			34.061.617.030,95

NOTA: 13 PASIVOS CON ORGANISMOS INTERNACIONALES

OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES MONETARIOS						
DEPOSITOS DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL EN MONEDA NAL CON EQUIV EN MONEDA EXTRANJERA			107.850.315.635,95			107.850.315.635,95
ASIGNACION NETA DE DERECHOS ESPECIALES DE GIRO Mas ASIGNACION NETA DE DERECHOS ESPECIALES DE GIRO			117.166.058.573,75	117.926.874.075,15		
REVAL POR APLICAR A NO RESID EN MONEDA NACIONAL		0,00		699.874.906,05		
Menos REVAL POR APLICAR A NO RESID EN MONEDA NACIONAL		(7.586.182,11)	117.158.472.391,64	0,00		118.626.748.981,20

OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES FINANCIEROS NO MONETARIOS						
DEPOSITOS DEL BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION Y FOMENTO EN MONEDA NACIONAL DEP. DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO MONEDA NACIONAL CON EQUIV EN MONEDA EXTRANJERA			3.481.236,85			14.381.236,85
DEPOSITOS DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO EN MONEDA NACIONAL			2.020.555.261,80			2.023.722.749,15
APORTAC. DE CAPITAL POR PAGAR A INSTITUCIONES FINANC.NO MONETARIAS EN MONEDA EXTRANJERA			1.459.696.854,69			1.461.985.122,38
APORTACIONES DE CAPITAL POR PAGAR A INSTITUCIONES FINANC. MONETARIAS EN MONEDA NACIONAL			7.835.107,09			7.835.107,09
TOTAL			228.611.885.437,30			230.096.517.781,90

NOTA: 14 EMISIONES DE DEUDA

EMISIONES DE DEUDA						
DEPOSITOS EN MONEDA NACIONAL A MUY CORTO PLAZO			210.943.690.275,76			343.058.203.925,68
TITULOS, BONOS DE ESTABILIZACION MONETARIA Y DEPOSITOS EN MONEDA NACIONAL A CORTO PLAZO				166.937.646.779,12		
Menos DESCUENTO EMISION CORTO PLAZO		(3.123.090.445,41)	163.529.939.650,78	(3.804.957.229,40)		163.132.689.549,72
TITULOS, BONOS DE ESTABILIZACION MONETARIA Y DEPOSITOS EN MONEDA NACIONAL A MEDIANO PLAZO				267.278.672.613,00		
Mas PREMIO POR RENDIMIENTO MEDIANO PLAZO		4.187.219.342,16		4.457.390.403,64		
Menos DESCUENTO POR RENDIMIENTO MEDIANO PLAZO		(19.727.238,52)	271.728.101.367,43	(35.301.374,10)		271.700.761.642,54
TITULOS, BONOS DE ESTABILIZACION MONETARIA Y DEPOSITOS EN MONEDA NACIONAL A LARGO PLAZO				1.956.172.662.886,00		
Mas PREMIO POR RENDIMIENTO LARGO PLAZO		23.920.926.653,63		24.341.210.350,48		
Menos DESCUENTO POR RENDIMIENTO LARGO PLAZO		(12.855.674.230,01)	1.963.707.015.309,62	(13.157.541.297,60)		1.967.356.331.938,88

TITULOS, BONOS DE ESTABILIZACION MONETARIA Y DEPOSITOS EN MONEDA EXTRANJERA A LARGO PLAZO	203.468.963.926,40	203.893.234.579,20
Más PREMIO POR RENDIMIENTO LARGO PLAZO	6.449.200.429,84	6.531.228.732,69
Menos DESC. POR EMISION Y/O REND DE TIT EN MON EXTRANJERA	<u>(2.698.638.573,09)</u>	<u>(2.848.172.627,20)</u>
TOTAL	<u>2.817.128.272.386,74</u>	<u>2.952.824.277.741,51</u>
<u>NOTA: 15 OTROS PASIVOS</u>		
OTROS PASIVOS		
OTRAS OBLIGACIONES CON NO RESIDENTES EN MONEDA EXTRANJERA	282.770.253,68	316.201.465,88
OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE TIMBRES, IMPUESTOS Y OTRAS POR DISTRIBUIR.	171.038.223,59	321.599.729,88
DEPOSITOS EN GARANTIA EN MONEDA NACIONAL	38.036.127,72	37.686.392,72
DEPOSITOS EN GARANTIA EN MONEDA EXTRANJERA	29.900.364,97	29.947.237,74
PROVISIONES VARIAS	9.489.422.526,90	9.526.375.026,90
PASIVOS DIFERIDOS	4.390.866.711,09	4.390.866.711,09
OTRAS OBLIGACIONES CON RESIDENTES EN MONEDA NACIONAL	8.255.847.945,80	11.606.865.177,88
VARIOS ACREEDORES EN MONEDA NACIONAL	2.008.412.229,00	1.890.794.031,52
CREDITOS A CLASIFICAR EN MONEDA NACIONAL	0,00	1.120.160,56
TOTAL	<u>24.666.294.382,75</u>	<u>28.121.455.934,17</u>
<u>NOTA: 16 PATRIMONIO</u>		
CAPITAL		
CAPITAL	5.000.000,00	5.000.000,00
RESULTADOS ACUMULADOS		
ESTABILIZACION MONETARIA	(2.486.358.004.290,85)	(2.486.358.004.290,85)
OPERACION	62.047.861.296,86	62.090.580.393,10
RESERVA POR FLUCTUACIONES DE TIPO DE CAMBIO	170.607.446.408,43	170.607.446.408,43
AJUSTE DE ADOPCION DE NIIF POR PRIMERA VEZ	28.502.752.913,59	28.502.752.913,59
CAPITALIZACION GUBERNAMENTAL		
CAPITALIZACION Y AMORT DE OPER. CUASIFISCALES	290.927.458.015,86	290.927.458.015,86
RESERVA LEGAL		
RESERVA LEGAL	10.000.000,00	10.000.000,00
TOTAL	<u>(1.934.257.485.656,11)</u>	<u>(1.934.214.766.559,87)</u>
<u>NOTA: 17 RESULTADOS</u>		
RESULTADO DIFERENCIAS DE CAMBIO	(6.885.973.372,10)	(1.577.178.461,41)
RESULTADO ESTABILIZACION MONETARIA	(74.691.844.604,87)	(56.363.919.899,28)
RESULTADO OPERACION	121.983.682,67	5.341.521.676,33
TOTAL	<u>(81.455.834.294,30)</u>	<u>(52.599.576.684,36)</u>

1 vez.—Solicitud N° 44170.—O. C. N° 2015014283.—(IN2015081847).